AUTO No. 200.6-22-0332 **CORPORINOQUIA** **FECHA** 09 MAR 2022

"POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER AMBIENTAL"

El Secretario General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA, en uso de las facultades estatutarias, legales y en especial las conferidas mediante Resolución de la Dirección General No. 200.36.20-0006 de fecha 02 de enero del año 2020 y la Resolución 100.41.14.0995 del 8 de julio de 2014, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009, procede a decidir lo que en derecho corresponde, con fundamento en los siguientes,

I. ANTECEDENTES

Mediante radicado No YO 2022-01782 del 14 de febrero del 2022 (fl.3), la Policía Nacional deja a disposición de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 1.165 kilos de carne de Chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), incautado el día 13 de febrero de 2022 a las 15:30 horas, mientras se realizaba como patrulla de vigilancia con el indicativo de cuadrante 1,realizando actividades propias del servicio, ingreso una llamada al número de la estación de policía de Trinidad del señor subteniente Daniel Lopez Igua, comandante Sección Escribo 2, del grupo montado guías del Casanare No 16 del ejército Nacional, el cual manifiesta estar realizando puesto de control en el kilómetro 1 en la vía de que conduce del Municipio de Trinidad al corregimiento de Bocas del Pauto kilómetro 1.

Que, durante el desarrollo de las actividades de patrullaje registro control de personas y vehículos en la vía que conduce del Municipio de Trinidad al corregimiento de Bocas del Pauto kilómetro 1, se observa transitar sobre dicha vía publica 1 vehículo tipo cama baja, color blanco marca Ford, placa CEK901, que lleva en un planchón u vehículo tipo camión de estacas color azul, marca DODGE, placas EXC 899,donde al momento de verificar la carrocería se observan unas bolsas color azul, que al interior contienen al parecer carne de chigüiro, la cama baja era conducida por el señor al señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá.

Que la Subdirección de Control y Calidad Ambiental, realizó la recepción de la carne de Chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), incautada, con el fin de realizar la verificación, inspección y pesaje, el producto ingresó con el Acta Única de Control al Tráfico ilegal de Flora y Fauna Silvestre No 0137133 de fecha 13 de febrero de 2022 (fl.7) y se determina que el peso exacto del producto carne de chigüiro es de 1.165 kilogramos.

Que, con fundamento en lo anterior, la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de esta Corporación emitió el Informe Técnico No.500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6).

II. CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTROL Y CALIDAD AMBIENTAL

De acuerdo con el Informe Técnico No.500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6), personal adscrito a la Subdirección de Control y Calidad Ambiental realizó inspección del producto incautado, donde se determinó que se trataba de 1.165 kilogramos de carne de Chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), incautado por la Policía, en labores conjuntas de registro a personas realizado el día 13 de febrero de 2022 a las 15:30 horas, al señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá, en la vía que conduce del Municipio de Trinidad al corregimiento de Bocas del Pauto kilómetro 1.

Del mencionado Informe Técnico se puede extraer lo siguiente:

"(...)

Con base en la información presentada por la Policía Nacional durante actividades de registro y control, donde se incautaron 1185 kilogramos de producto de la fauna carne de Chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), al señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá se establece que de la observación de las piezas decomisadas y de acuerdo con sus características físicas y organolépticas (olor, color y textura, se confirma que corresponden a carne de Chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris), que pertenece a especies de la fauna silvestre Colombiana; el presunto infractor no posee Salvoconducto de Movilización de productos de la fauna silvestre,

tampoco poseen autorización o permiso para la captura de la especie, así mismo, se verifico que la especie (Hydrochoerus hydrochaeris), se encuentra categorizada como de "Preocupación menor (LC) con dinámica poblacional estable. A nivel nacional no se encuentra actualmente bajo criterio de amenaza, pero se encuentra incluida en el Apéndice II de CITES (Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre), por lo tanto, se declaran como presunto responsable del aprovechamiento ilicito de recursos naturales al señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya – Boyacá

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1333 de 2009, existe una infracción ambiental por la extracción ilegal de productos de la fauna silvestre y por no adelantar los trámites respectivos para obtener el permiso de caza o autorización para la movilización del producto de la fauna silvestre. Debido a que cantidad de carne de Chigüiro transportada eran 1165 kilogramos, se determina que se trata de producto de la fauna proveniente de al menos treinta y un (31) animales juveniles.

Teniendo en cuenta el estado de conservación de la carne, que fue recibida fresca, con olor característico y las deficitarias condiciones sanitarias y/o de refrigeración del transporte, permiten establecer que no es apta para consumo humano, por lo tanto como disposición final se procederá a enterrar la carne a un (1) metro de profundidad y cubierta con una capa de cal viva de 2 centímetros de espesor, para acelerar la descomposición y evitar la propagación tanto de olores como microrganismos, para luego ser cubierta en su totalidad con tierra.

(...)"

PRESUNTO RESPONSABLE IDENTIFICADO

Una vez analizada la información allegada por la Policía Nacional y de conformidad con el Informe Técnico No.500.20.7.22-0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6), y memorando interno No 500.22. 0336 de fecha 09 de marzo de 2022 (fls 1-2), se determina como presunto infractor de la normatividad ambiental al señor al señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá, a quien le fue incautada 1.165 kilogramos de carne de chigüiro.

III. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES

Que la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada por la Conferencia de las Naciones Unidas del 3 al 14 de junio de 1992 en Río de Janeiro, instrumento que hace parte del bloque de constitucionalidad de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, proclamó una serie de principios, entre los cuales se encuentran:

PRINCIPIO 2
De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y **la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados** o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional.

PRINCIPIO 11
Los Estados deberán **promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente.** Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo.

PRINCIPIO 15
Con el fin de proteger el medio ambiente, **los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades**. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Que, en armonía con el anterior instrumento internacional, la Constitución Política de Colombia, denominada Constitución Ecológica[1] por la Corte Constitucional, en su desarrollo ha establecido los lineamientos en la política ambiental del país, por ejemplo, en su artículo 8° señala que *"es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y* ***naturales*** *de la nación"*.

Que en el artículo 49 establece como servicio público a cargo del Estado el saneamiento ambiental, además, el artículo 79 advierte, entre los derechos colectivos, la garantía que tiene toda persona de gozar de un ambiente sano.

En ese mismo sentido el artículo 58 le otorga a la propiedad privada la función ecológica inherente y el artículo 80 advierte sobre la obligación del Estado de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales y con ello garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, además, la administración deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, **imponer las sanciones legales** y **exigir la reparación de los daños causados**.

El artículo 95 de la Constitución señala que uno de los deberes del ciudadano es proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.

Que, en complemento del marco constitucional, existía en la legislación nacional el Decreto 2811 de 1974 -Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente - que en su artículo 1° otorga al ambiente de patrimonio común y advierte que: *"el Estado y* ***los particulares deben participar en su preservación y manejo****, que son de utilidad pública e interés social"*.

A su vez la Ley 99 de 1993 asigna a las Corporaciones Autónomas Regionales las funciones señaladas en los numerales 2 y 17 del artículo 31, que a la letra dicen:

Artículo 31. *Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones:*

2. Ejercer la función de ***máxima autoridad ambiental*** *en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazadas por el Ministerio de Medio Ambiente.*

17. ***Imponer y ejecutar a prevención*** *y sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras autoridades,* ***las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley****, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales renovables y exigir con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.*

Que, entre otros aspectos, el Título XII ibidem de esa misma normatividad, señala el tipo de medidas preventivas y las sanciones a imponer al infractor de normas sobre protección ambiental o sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales renovables; de igual forma, precisa que la imposición de multas no exime al infractor de la ejecución de obras o medidas ordenadas por la autoridad ambiental responsable del control, ni la obligación de restaurar el medio ambiente.

Que especialmente la Ley 1333 de 2009, a través de la cual se señala el procedimiento sancionatorio ambiental, en su artículo 1° advierte que la titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental está a cargo del Estado a través del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos, entre otras.

Que en los términos del parágrafo de ese artículo en concordancia con el parágrafo 1° del artículo 5°, en materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo que dará lugar a la imposición de las medidas preventivas correspondientes, además, advierte que el infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción que sobre él recae, para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.

Que el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009, establece que el proceso sancionatorio se iniciará mediante acto administrativo motivado y se adelantará de oficio, a petición de parte o como consecuencia de haberse impuesto una medida preventiva, con el fin de verificar los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL

[1] Corte Constitucional – M.P. Alejandro Martínez Caballero – sentencia del 17 de junio de 1992 – Expediente T-411 de 1992.

Que es obligación de esta Corporación, por mandato superior, mediante el cumplimiento de las funciones asignadas legalmente y en el ámbito de su competencia, hacer efectivos los preceptos constitucionales y legales dentro del marco del estado social de derecho y de conformidad con el Informe Técnico No.500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6), mediante el cual la Subdirección de Control y Calidad Ambiental realizó inspección del producto de fauna incautado correspondiente a 1.165 kilogramos de carne, específicamente de la especie Chigüiro (Hydrochoerus hydrochaeris) al señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá, quien no contaba con salvoconducto de movilización de productos de la fauna silvestre, ni autorización o permiso para la captura y caza de la especie.

Así las cosas, y de acuerdo con los hallazgos señalados en el Informe Técnico No.500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6), este Despacho encuentra mérito suficiente para iniciar investigación sancionatoria ambiental en contra del señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá, por incumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, Artículos 2.2.1.2.4.2, 2.2.1.2.22.1 y 2.2.1.2.22.2, al no contar con la Autorización o permiso para el Aprovechamiento de la fauna silvestre, ni portar el respectivo salvoconducto de movilización de fauna silvestre.

Por lo anterior se le recuerda al presunto infractor que las disposiciones contenidas en la normatividad vigente y en los instrumentos de control y manejo ambiental, están dirigidas a conciliar la actividad económica, con la necesidad de preservar y mantener un ambiente sano; por lo tanto, su incumplimiento constituye contravención a las normas ambientales, en los términos del Artículo 5° de la Ley 1333 del 2009.

De acuerdo con lo anterior, esta Autoridad desplegara todas las diligencias administrativas con el fin de establecer si los hechos evidenciados constituyen o no infracción ambiental, a efectos de determinar la continuidad o no de la actuación, mediante la formulación de cargos a la que eventualmente haya lugar, para lo cual podrá practicar todo tipo de diligencias, incluyendo toma de muestras, exámenes de laboratorio, mediciones, caracterizaciones y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción y completar los elementos probatorios.

Que las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, de acuerdo a lo observado en el memorando No. 500.22-0336 del 09 de marzo de 2022 de identificación de variables anexas al informe técnico No. 500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6), se encontró el agravante previsto en el numeral 8 del artículo 7 de la Ley 1333 de 2009, el cual indica:

"(...)

8. Obtener provecho económico para sí o un tercero.

(...)"

Ahora de la lectura de los anteriores razonamientos, se concluye que la normatividad tendiente a la protección y conservación del medio ambiente establece circunstancias en que las personas pueden hacer uso de los recursos naturales renovables, solo con la debida tramitación y obtención de los respectivos permisos, licencias o autorizaciones, expedidos por parte de la Autoridad Ambiental Competente, así las obligaciones contenidos en estos y que el incumplimiento a dicha obligación de la normatividad que se rige por los principios de la política ambiental acarrea la imposición de sanciones dispuestas en la correspondiente norma sancionatoria ambiental.

Así las cosas, y de acuerdo con los hallazgos señalados en el Informe Técnico No.500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6) y en el memorando de identificación de variables No. 500.22-0336 del 09 de marzo de 2022 (fls.1-2), este Despacho encuentra mérito suficiente para iniciar investigación sancionatoria ambiental en contra del señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá, por incumplimiento a la normatividad ambiental en especial a lo establecido en el en el Decreto 1076 de 2015, Artículos 2.2.1.2.4.2, 2.2.1.2.22.1 y 2.2.1.2.22.2, al no contar con la Autorización o permiso para el Aprovechamiento de la fauna silvestre, ni portar el respectivo salvoconducto de movilización de fauna silvestre.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tendrá como elemento probatorio el Informe Técnico No. 500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6), y en el memorando de identificación de variables No. 500.22-0336 del 09 de marzo de 2022 (fls.1-2),contentivo de los hechos evidenciados en la inspección del espécimen incautado, documentos que reposan en el expediente sancionatorio ambiental No. 200.32.7.22.091 y que quedarán a disposición del presunto infractor para que ejerza el derecho de contradicción y defensa, a quien se ordenará notificar el contenido del presente acto administrativo en los términos del artículo 67 y ss de la ley 1437 del 2011.

Que en el Informe Técnico No. 500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6), y en el memorando de identificación de variables No. 500.22-0336 del 09 de marzo de 2022 (fls.1-2), y el acta única de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre No 0137133, se pudo evidenciar que una vez revisado en la página de antecedentes penales y requerimientos judiciales de la policía Nacional de Colombia, visto a folio (23), se cometió un error de digitación en el nombre del señor JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO.

Que de acuerdo con el principio de eficacia señalado en el numeral 11 del artículo 3° del CPACA, las autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad y para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales y se sanearan las irregularidades procesales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa.

Que acerca de la corrección de errores formales el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, señala: "Decreto 1437 de 2011, Artículo 45. Corrección De Errores Formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda."

Que en virtud de lo anterior este despacho de oficio procederá a corregir el nombre del presunto responsable, que para todos los efectos será **JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá

Es de anotar que esta Autoridad adelantará la investigación de carácter ambiental, en el marco del derecho al debido proceso, comunicando de manera formal el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental y salvaguardando en todas sus etapas los principios de contradicción e imparcialidad, siendo conductas que rigen la actuación de esta Autoridad.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, se dispondrá la publicación del presente acto administrativo, con el fin de garantizar la intervención de los ciudadanos.

En mérito de lo expuesto, la Secretaria General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA,

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO: Iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio ambiental en contra de **JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: En orden a determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción ambiental y completar los elementos probatorios, se podrá de oficio realizar todo tipo de diligencias y actuaciones administrativas que se estimen necesarias y pertinentes, en los términos del artículo 22 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO TERCERO: Tener como elemento probatorio el Informe Técnico No. 500.20.7.22.0014 del 14 de febrero de 2022 (fls.4-6), y en el memorando de identificación de variables No. 500.22-0336 del 09 de marzo de 2022 (fls.1-2), documentos que reposan en el expediente sancionatorio ambiental No. 200.32.7.22-091 y que quedarán a disposición del presunto infractor para que ejerza el derecho de contradicción y defensa.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de esta decisión a **JOSE RICARDO CASTELLANOS VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía número 7.120.772 de Saboya-Boyacá, o a quien en forma expresa autoricen, conforme las reglas prescritas en los artículos 67, 68 y 69 de la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. - De conformidad con el numeral 1 del artículo 5° de la Ley 1437 de 2011, el presunto infractor podrá remitir sus escritos, al correo electrónico atencionusuarios@corporinoquia.gov.co

ARTÍCULO QUINTO: Por secretaria, comunicar el contenido del presente acto administrativo, a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios del departamento de Casanare, para lo de su competencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, enviándole copia de esta providencia.

ARTÍCULO SEXTO: Ordenar a la Oficina de Sistemas de la Corporación, publicar el presente acto administrativo en la página web de CORPORINOQUIA de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 70 de la Ley 99 de 1993 y una vez surtido este trámite deberá allegar al expediente copia de la publicación que evidencie su cumplimiento.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Tener como interesado a cualquier persona que así lo manifieste conforme lo establecen el artículo 69 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, para efectos del trámite de las peticiones de intervención aplicar lo señalado por el artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO OCTAVO: Contra el presente acto no procede recurso alguno, de conformidad con lo señalado por el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE ANDRÉS MARIÑO ÁLVAREZ
Secretaria General

Revisó: *María del Pilar Vargas V. / contrato de prestación de servicios N° 120-12-13-22-0152 del 25/01/2022*
Proyectó: *Heilly Meléndez / Abogada S. G – CPSP. 120.12.13.22-177 del 28/01/2022*